



Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

NOTA n° 5044/2018  
SISA n° 12.122  
Rec. Apelac. /JT

## RECURSO DE APELACION

**Señor juez federal:**

**Ignacio Martín Irigaray**, Subsecretario de Investigaciones y **Juan Trujillo**, Director Nacional de Litigio Estratégico, de la Subsecretaría de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, manteniendo el domicilio electrónico 27222265644 y legal en Tucumán 394 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el rol de **querellantes** en la **causa n° 3017/2013** caratulada "**Báez, Lázaro Antonio y otros sobre encubrimiento y otros**" del registro de la secretaría n° 13 de ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, a su cargo, exponemos:

### I.- OBJETO

Que con arreglo a las previsiones de los artículos 311, 449 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, acudimos a interponer recurso de apelación contra el **punto dispositivo I** del auto de fecha **9 de noviembre de 2018**, que declaró la **falta de mérito** para procesar o sobreseer a **Cristina Elisabet Fernández** por los hechos por los que fue indagada (art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación).

## **II.- MOTIVACION**

Básicamente, V.S. arriba al temperamento expectante adoptado en el entendimiento de que no existen evidencias que permitan conectar a la imputada Cristina Elisabet Fernández con las maniobras de expatriación de capitales aquí investigadas, las que, a su entender, de momento sólo parecen haber sido realizadas en beneficio de Lázaro Antonio Báez y sus hijos.

Sin embargo, por los argumentos que a continuación se expresan, consideramos que, de adverso a lo sostenido en la resolución apelada, concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada con las maniobras y, en consecuencia, dictar su procesamiento en los términos del art. 306 del C.P.P.N.

En primer lugar, no compartimos la apreciación realizada por V.S. en cuanto a que los dichos de Jorge Leonardo Fariña, ciertamente reveladores de los sucesos bajo investigación, sean opuestos a la hipótesis de los acusadores.

Y ello es así, porque de diversos pasajes de la declaración de Fariña surgen indicadores que permiten dar crédito a la imputación que se dirige a la expresidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández.

En esa inteligencia, debe computarse que, según el relato de Fariña, Cristina Fernández le había preguntado a Lázaro Antonio Báez si estaba sacando dinero al exterior –según la advertencia realizada por la Embajada de



Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Estados Unidos-, lo que fue negado por Báez -pese a que era cierto-, tras lo cual instruyó a Fariña a ser más cauteloso con tales movimientos.

Pues bien, tal revelación es indicativa, por un lado, de que Fernández de Kirchner tenía vocación de dominio sobre los fondos dinerarios canalizados en el exterior por Lázaro Antonio Báez y personas de su entorno; y, por otra parte, de que sabía -o consentía- cuando menos en forma genérica, las maniobras de expatriación, ocultamiento y exteriorización.

Por otra parte, Fariña fue preciso al señalar que, si bien el dinero de origen ilícito era manejado por Lázaro Báez, en verdad era de propiedad de Néstor Kirchner.

Y también subrayó que, tras la muerte de Néstor Kirchner, como Cristina Fernández "no estaba al tanto de **todo** lo que Báez tenía" (el remarcado nos pertenece), ella, junto con su hijo, fueron a reclamar a los empresarios amigos del marido lo que teóricamente era de él.

Es decir, el hecho de que Cristina Elisaabet Fernández tuviera conocimiento de la colocación en cabeza de Lázaro Báez de una masa de dinero de origen ilícito perteneciente a su difunto esposo, pero que no conociera con exactitud cada una de las operaciones -como es normal que ocurra en el caso de socios, prestanombres y simples gestores-, en nada quita su responsabilidad en el evento.

Por el contrario, estas revelaciones permiten formar criterio suficiente de que Cristina Elisabet Fernández tenía vocación sobre el dinero de origen ilícito que manejaba Lázaro Antonio Báez, que en verdad era de

propiedad de su esposo, y que tras la muerte de éste consideraba que esa fortuna le pertenecía.

Por lo tanto, más allá de que Lázaro Antonio Báez, con o sin éxito, pudiera haber procurado esconderle a la expresidenta una porción de la fortuna que administraba y distraerla en provecho suyo y de su familia, lo cierto es que Cristina Elisabet Fernández tenía aspiraciones de poseer todo ese patrimonio y sabía que podría ser canalizado a través de estructuras en el exterior.

En tales condiciones, más allá de la advertencia efectuada por Cristina Fernández a Lázaro Báez sobre posibles maniobras de expatriación de fondos a sus espaldas, lo cierto es que esos fondos retornaron en el modo en que estableció en el legajo y se exteriorizaron en el patrimonio de Austral SA. La repatriación y exteriorización por medio del vehículo societario habitual, no se condicen con la hipótesis de la resolución apelada –que todas las operaciones investigadas tenían por fin engañar a Fernández-.

El retorno de los fondos que ya habían sido expatriados, resulta indicativo de una reversión de aquél desvío. Indicio probatorio es que el vínculo entre Báez y Fernández no se quebrantó, sino que siguió adelante.

Prueba de ello es que, aunque en menor medida, las empresas de Báez continuaron siendo adjudicatarias de contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz direccionadas de modo fraudulento – conforme causa n° 5048/2016-, constitutivos de la fuente del dinero aplicado a las posteriores maniobras de lavado.





Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Y la evidencia cabal del conocimiento de éstas conductas por parte de Cristina Elisabet Fernández la constituyen las diversas acciones, emanadas de distintos órganos estatales de poder durante su gobierno, tendientes a brindar protección administrativa y judicial a Lázaro Antonio Báez, tanto antes como después de aquella advertencia.

En esa dirección, deben computarse las determinaciones alcanzadas en la **causa n° 3215/2015** caratulada "Echegaray, Ricardo Daniel y otros s/averiguación de delito", que tramitó en este mismo Juzgado Federal n° 7, actualmente elevado a juicio, en la que se acreditó provisoriamente que el ex titular de la Administración Federal de Ingresos públicos, Ricardo Echegaray, y el ex titular de la Dirección General Impositiva, Ángel Rubén Toninelli, en violación a sus deberes funcionales, obstruyeron el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca contra empresas que, mediante facturación apócrifa, permitían realizar maniobras de evasión y disposición de fondos líquidos a la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo socio mayoritario era Lázaro Antonio Báez. A punto tal que los ex funcionarios involucrados disolvieron la Dirección Regional Bahía Blanca, que emprendía tales investigaciones, desplazando a supervisores e inspectores.

Más aún, al confirmar el procesamiento de Echegaray y Toninelli, la Sala II de la Excma. Cámara Federal de esta ciudad señaló la existencia de indicios indicativos de que la conducta de los encartados – calificada como constitutiva del delito de encubrimiento- habría respondido a los designios de autoridades superiores de Echegaray.

En igual concepción, en la **causa n° 4773/2013** caratulada “Casanello, Sebastián Norberto y otros s/encubrimiento”, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8, secretaría n° 15, se estableció que los entonces fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos, Carlos Gonella y Omar Orsi, incurrieron en el delito de prevaricato al momento de requerir la instrucción de esta causa n° 3017/2013, pues dejaron al margen de ese acto de impulso a los principales hechos de expatriación de divisas que comprometían a Lázaro Báez y personas de su entorno, limitándolo a sucesos y protagonistas de menor relevancia.

Así, ambos funcionarios del Ministerio Público Fiscal han sido procesados por el delito de prevaricato, tanto en primera como en segunda instancia (CFP 4773/2013/3/CA1, C.C.C.F., Sala II, resuelta el 15 de abril de 2015).

Del mismo modo, ante el propio Juzgado Federal n° 7 tramita la **causa n° 9334/2016** caratulada “Abbona, Angelina y otros sobre averiguación de delito”, en la que se investiga el posible encubrimiento de las conductas delictivas investigadas en esta causa n° 3017/2013, que se adjudica a la exProcuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, y otros altos funcionarios del Ministerio de Economía, quienes habrían ocultado información relacionada con las cuentas bancarias supuestamente abiertas por Lázaro Antonio Báez y allegados en los Estados Unidos de América.

Todos estos elementos de juicio conforman un cuadro de presunciones que habilitan a sostener que existió una decisión de proteger,



desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, a las maniobras de lavado de activos reprochadas a Lázaro Antonio Báez y su entorno, tanto para permitirle ejecutarlas como para, luego, procurar su impunidad.

En este contexto, cobra sustento la injerencia que habría tenido la expresidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández, en las maniobras de lavado de activos reprochadas a Lázaro Antonio Báez, tanto más cuando aquella pretendía poseer todo el patrimonio puesto en cabeza de este.

En lo atinente al fideicomiso testamentario otorgado por Lázaro Antonio Báez sobre sus bienes por el plazo de 30 años, debemos señalar que no compartimos la inteligencia -asignada en el decisorio impugnado- de que haya sido concebido para blindar su patrimonio, para después de su fallecimiento, a favor de su familia.

Es que, en primer lugar, no se advierte por qué sería necesario preservar, mediante un fideicomiso testamentario, propiedades y activos a favor de sus herederos forzosos, cuando éstos ya gozaban de vocación hereditaria según las reglas generales en materia de sucesiones.

Luego, y en línea con las anteriores presentaciones de esta Oficina Anticorrupción, consideramos que el fideicomiso testamentario en cuestión, más allá de su significado aparente, en verdad constituyó una suerte de contradocumento que sólo se explica como el reflejo de una realidad distinta de la que surgía -y aún surge- formalmente del patrimonio puesto en cabeza de Lázaro Antonio Báez: que no le pertenece a él, sino a otras personas.



Y esas otras personas son Néstor Carlos Kirchner, antes, y Cristina Elisabet Fernández, ahora.

Esta conclusión encuentra sustento en numerosos elementos de juicio, que surgen tanto de esta causa judicial como de aquellas otras conexas.

En tal sentido, los multimillonarios fondos asignados durante el gobierno de los Kirchner en concepto de obras viales a las empresas de Lázaro Antonio Báez, que en poco tiempo pasó de ser un empleado bancario a un poderoso empresario de la construcción, sumado al estrecho vínculo personal que poseía con el expresidente Néstor Carlos Kirchner y al reingreso de parte de esa suma en concepto de contratos comerciales con empresas de los Kirchner (causas n° 5048/2016, 3732/2016 y 11.352/2014), entre otras consideraciones valoradas en los anteriores escritos de esta querella, constituye un fuerte elemento indiciario que da cuenta que los planes para aumentar el patrimonio de Báez no se limitaban a beneficiar a éste, sino que había una finalidad superior: disponer de toda esa fortuna a través de una persona interpuesta.

Esta conclusión, según ya se dijo, aparece en línea con la declaración de Jorge Leonardo Fariña del 8 de abril de 2016, oportunidad en la que reveló que el dinero que tenía Lázaro Báez era, en realidad, de Néstor Kirchner, como así también que, luego de la muerte de éste, Cristina Fernández,





Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

junto a su hijo, acudió a reclamar, tanto a Báez como a otros empresarios, lo que ella consideraba de su propiedad.

Y si bien es cierto –como se apuntó en la resolución en crisis- que el objeto del testamento recae sobre los bienes declarados que conforman el patrimonio de Lázaro Antonio Báez en el país, no puede perderse de vista que constituye un fuerte elemento indiciario de que la fortuna acumulada por Lázaro Antonio Báez, declarada o no, en el país o en el extranjero, no le pertenecía a él. Sólo así se entiende semejante restricción a la libre disponibilidad de su patrimonio por parte de sus herederos.

Entonces, es propicia la ocasión para plantearse, además, como una hipótesis delictiva alternativa, si la puesta en cabeza de Lázaro Antonio Báez y de sus empresas –creadas justamente para canalizar fondos de origen delictivo- de la colosal fortuna obtenida al amparo de contratos de obra pública fraudulenta responde a una maniobra de lavado de activos diferente del tramo que fue elevado a juicio y, en tal sentido, si corresponde otorgar intervención al representante del Ministerio Público para que se expida sobre el punto.

Se deja así motivado el presente recurso de apelación, sin perjuicio de ampliar sus fundamentos al momento de informar ante el tribunal de alzada.

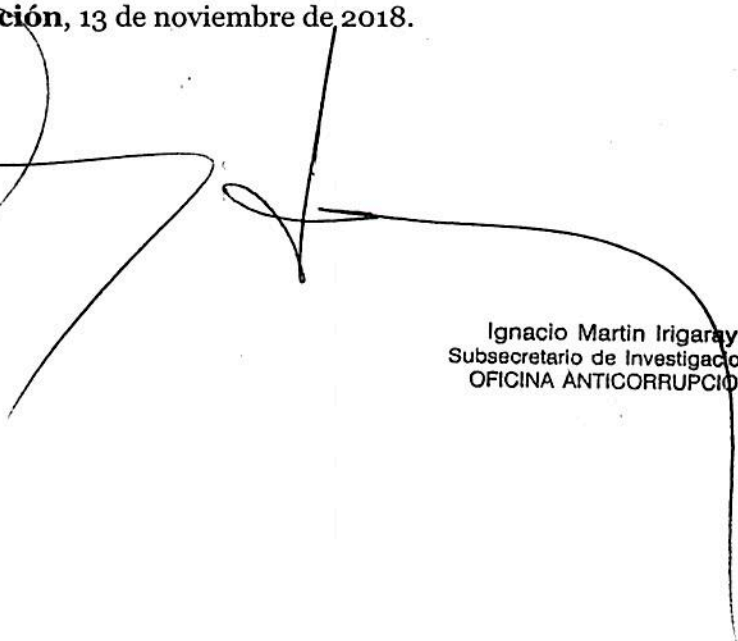
### **III.- PETITORIO**

Por lo expuesto, se solicita a V.S. que tenga a bien conceder el recurso de apelación deducido, y elevar la causa a consideración y decisión de la Excma. Cámara Federal del circuito.

**Oficina Anticorrupción, 13 de noviembre de 2018.**



**JUAN TRUJILLO**  
DIRECTOR NACIONAL  
DE LITIGIO ESTRATÉGICO  
OFICINA ANTICORRUPCIÓN



**Ignacio Martín Irigaray**  
Subsecretario de Investigaciones  
OFICINA ANTICORRUPCIÓN